



## Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:  
**Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

### Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra  
hacer obras derivadas

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

## **La libertad de expresión en redes sociales en Colombia desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional: El caso de los servidores públicos.<sup>1</sup>**

**David Alonso Mora Álvarez**  
**Universidad Católica de Colombia**

### **Resumen**

El derecho a la libertad de expresión en redes sociales ha resultado un asunto controversial en los últimos años, teniendo en cuenta la dimensión de lo que en dichas redes se expresa y su rápida difusión. De ahí que se hayan venido planteando una serie de interrogantes respecto del grado de libertad que tiene cada individuo, cuando se refiere a otra persona en redes sociales y en qué momento dichas afirmaciones pueden ser consideradas como una calumnia o injuria. En ese sentido este estudio se plantea un análisis a profundidad sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de libertad de expresión y en particular la Sentencia T-155 de 2019 para el caso de los servidores públicos, que expone una serie de criterios frente a los cuestionamientos a servidores públicos a través de redes sociales y su legitimidad.

**Palabras clave:** Colombia, Estado, Redes Sociales, Libertad de Expresión, Exposición Mediática Servidores públicos.

### **Abstract**

The right to freedom of expression in social networks has been a controversial issue in recent years, considering the size of what is expressed in these networks and their rapid dissemination. In that sense, a series of questions have been raised regarding the degree of freedom that each individual has, when referring to another person in social networks and at what time such statements can be considered as slander or insult. In that sense, this paper presents an develop analysis of the

---

<sup>1</sup> Artículo de reflexión elaborado por David Alonso Mora Álvarez, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, con materias culminadas, correo electrónico: [damora79@ucatolica.edu.co](mailto:damora79@ucatolica.edu.co), como Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado, bajo la dirección del Dr. César Augusto Castillo Dussán, Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, 2019.

jurisprudence of the Constitutional Court regarding freedom of expression and Judgment T-155 of 2019 in the case of public servants.

**Keywords:** Colombia, State, Social Networks, Freedom of Expression, Media Exhibition Public Servants.

## Sumario

Introducción. 1. Derecho a la libertad de expresión en Colombia. 1.1. Contexto de la libertad de expresión en el derecho internacional. 1.2 Análisis normativo de la libertad de expresión en Colombia. 2. Análisis Jurisprudencial de los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a los límites de la libertad de expresión. 2.1 Sentencia T-713 de 2010. 2.2 Sentencia T-050 de 2016. 3. Análisis de la Sentencia T-155 de 2019 sobre la libertad de expresión en el caso de opiniones sobre servidores públicos. Conclusiones. Referencias.

## Introducción

La Constitución Política de 1991, reconoce el derecho a la libertad de expresión y lo consagra como un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución, este establece que toda persona goza de la garantía de expresar y difundir de manera libre sus opiniones y pensamientos, a la vez, informar y recibir información imparcial y cierta, proscribiendo la censura (Cifuentes, 2000).

Ahora bien, este derecho no es absoluto, y en ese sentido no puede vulnerar el derecho al buen nombre y a la intimidad personal de los individuos. En el caso concreto de las redes sociales, se ha generado una discusión acerca de los límites que tiene la libertad de expresión frente a las aseveraciones que se realicen sobre servidores públicos (Sánchez, 2018).

Es importante resaltar que los servidores públicos cuenta con un grado de exposición social mayor, y en el concepto de la Corte Interamericana, “el umbral de protección, esto es, en otras palabras, la crítica legítima y admisible, que rige en el caso de los funcionarios públicos o, en general de las personas que ejercen o aspiran a ejercer funciones de interés público” (García y Gonzales, 2007, p.49).

En armonía con los argumentos mencionados, se plantea como pregunta de investigación la siguiente ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en redes sociales cuando se cuestionan conductas de servidores públicos? Dicho análisis se plantea a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y tiene el objetivo principal de determinar los límites de la libertad de expresión en redes sociales cuando se cuestiona a servidores públicos en Colombia.

El desarrollo del artículo a través de la aplicación de la metodología de análisis doctrinal y jurisprudencial hermenéutica (Agudelo, 2018), que busca identificar mediante el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las nociones de libertad de expresión en redes sociales, de igual manera se analizan diversas publicaciones académicas sobre la libertad de expresión y las opiniones que se difunden sobre servidores públicos en redes sociales, a partir de los cuales se construyen las conclusiones.

### **1. Derecho a la libertad de expresión en Colombia.**

La libertad de expresión es un derecho del cual es titular cualquier individuo, esto quiere decir que toda persona goza de la garantía de expresar y difundir de manera libre sus opiniones y pensamientos, sin que por ello deba ser agraviado. Así entonces la libertad de expresión ha sido objeto de inclusión en diversos tratados y convenios de derecho internacional, y así mismo incluido por los Estados en su ordenamiento jurídico.

En la actualidad, el avance de diferentes tecnologías de la información y utilización de las redes sociales, ha permitido que las personas se comuniquen de manera más sencilla y se difundan opiniones en estos medios sobre temas que se debaten a diario. Sobre este tema se ha abierto un debate, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se difunden opiniones que pueden afectar el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra de la persona que se está cuestionando (Pauner, 2018).

Este tipo de eventos, es común en el ordenamiento jurídico colombiano, y ha llegado a ser debatido en el ámbito judicial mediante decisiones emitidas en el ámbito de la acción de tutela (Saura, Palos & Navalpotro, 2018), donde se entra a ponderar la prevalencia del derecho a la libertad de expresión frente al derecho al buen nombre y a la honra. Sobre el tema la Corte Constitucional ha hecho un

importante análisis, diferenciando aquellos casos en que se presentan diferencias entre particulares por difusión de información de estos, y en los casos que se difunden opiniones o cuestionamientos sobre servidores públicos.

Ejemplo de lo anterior, es las diferentes acciones de tutela que se han interpuesto por afirmaciones realizadas en redes sociales sobre personajes de la vida pública, de las cuales en ocasiones la Corte Constitucional ha ordenado la retractación de las mismas (Concha, 2008), como ha sido el caso de afirmaciones expuestas por personajes de la vida política como Claudia López<sup>1</sup> o el Expresidente Álvaro Uribe<sup>2</sup>. En el análisis de lo anterior, es importante analizar el contexto del derecho a la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico colombiano.

### **1.1 Contexto de la libertad de expresión en el derecho internacional:**

La libertad de expresión es un derecho reconocido como un derecho innato del ser humano, el cual se consagró en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que todos los individuos tienen derecho a expresar de manera libre sus opiniones, además el alcance de este derecho se circunscribe también al de no ser molestado a causa de sus opiniones y poder investigar, recibir diversos tipos de información u opiniones y difundirlas, lo que hace referencia a la libertad de prensa (Arboleda & Aristizábal, 2018).

En este mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 13 señalo de manera más amplia el derecho a la libertad de expresión, indicando que dentro de este derecho debe comprenderse la libertad de pensamiento, pero además aquella libertad de informar o compartir información, sin censura alguna por parte del Estado ni sus instituciones. Este derecho también ha sido reconocido en el ordenamiento jurídico interno colombiano como se verá a continuación.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado “La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles. Una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse

---

<sup>1</sup>Caso Claudia López Vs. Luis Felipe Henao. Para más información revisar <http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20OCT2017/STL13238-2017.doc>.

<sup>2</sup> Caso Álvaro Uribe Vs. Daniel Samper Ospina. Ver: <http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20NOV2017/FICHA%20STP14284-2017.docx>

libremente” (García & Gonza, 2007), en esa medida todos los Estados deben garantizar dicho derecho y velar por que no se genere algún tipo de censura.

Así mismo, a través de varias de sus sentencias ha indicado la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión, y evitar las acciones de censura. Como en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica<sup>3</sup>, se hizo énfasis en la dimensión de este derecho:

La primera dimensión de la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, 2004).

Como es evidente, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se protege de manera amplia la libertad de expresión y de pensamiento, y en esa medida lo ha expresado a través de sus sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento para los Estados parte.

## **1.2 Análisis normativo de la libertad de expresión en Colombia:**

Ahora bien, en el ámbito interno, el Constituyente de 1991 en el marco del Estado Social de Derecho señaló una serie de derechos fundamentales que tienen los individuos, dentro de dicho catálogo de derecho se encuentra el derecho a la libertad de expresión que hace referencia a la posibilidad que tiene cada persona de expresar su forma de pensar, respecto de cualquier tema.

Debe advertirse que la Corte Constitucional colombiana ha indicado que:

---

<sup>3</sup> Este caso estudia las violaciones cometidas por el Estado de Costa Rica, por la imposición de una sentencia penal condenatoria en contra del periodista Mauricio Herrera Ulloa, debido a unos artículos de prensa publicados en el periódico “La Nación” por el periodista, cuyo contenido supuestamente reproducía de manera parcial los documentos de otro autor.

La libertad de expresión comprende dos aspectos distintos, el primero de ellos es la libertad de información, orientada a proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial sobre todo tipo de opiniones, incluyendo hechos e ideas, y el segundo aspecto, es aquel que hace referencia a la libertad de opinión, entendido como libertad de expresión en sentido estricto, el cual implica básicamente la posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos (Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2018).

Lo anterior, permite inferir que cualquier persona goza de la titularidad del derecho de expresión, no obstante, este derecho tiene una serie de límites debido a que cuando se da acusa a alguna persona de la comisión de un delito, o se hace referencia a la misma en términos deshonrosos, el legislador ha indicado que se puede estar incurriendo en el tipo penal de injuria y calumnia.

Cabe resaltar, como lo indica Carmona (2012) que estos tipos penales han tenido una evolución histórica en el contexto penal colombiano, y tiene como finalidad salvaguardar el buen nombre y la honra de cada individuo, teniendo en cuenta que esto también es un derecho fundamental, por esta razón a través de la tipificación de los mismos ha fijado una serie de límites a la libertad de expresión.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

La Corte considera que el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de la persona por su comportamiento en ámbitos públicos. Mientras que la honra, por su parte, se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona. En suma, el buen nombre se refiere a la apreciación que se otorga a la persona por asuntos relacionales (cumplimiento de obligaciones dinerarias, aptitud para dirigir un equipo deportivo, entre otras), mientras que la honra se refiere más a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella (Corte Constitucional, Sentencia C-442 de 2011).

Es claro entonces que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental el mismo encuentra una serie de límites frente a otro tipo de derechos de la misma categoría, como lo es el

buen nombre, de llegar a afectar este tipo de derechos podría incurrirse en el tipo penal de injuria y calumnia, y ordenarse por parte de un juez la reparación al daño causado mediante la rectificación de lo expuesto.

De igual manera, es importante resaltar que en virtud de la figura del bloque de convencionalidad que hace referencia a las normas y principios que pese a no aparecer en la Constitución de manera expresa, se deben considerar como un parámetro de constitucionalidad en cuanto están integrados a la misma mediante dicha figura (Pinilla & Cubides, 2016), dichas normas son concretamente los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. En razón de lo anterior, Colombia debe acoger las disposiciones que en materia del derecho a la libertad de expresión se han dado en el marco del derecho internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en esa medida se deben proteger las opiniones y su difusión teniendo en cuenta las limitaciones permitidas sobre el mismo.

En esa medida, las restricciones que se impongan al derecho a la libertad de expresión deben estar plenamente justificadas, como al respecto lo ha expresado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2010) que afirma que para que las limitaciones del derecho a la libertad de expresión sean legítimas y estén en concordancia con el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana, se debe cumplir con tres requisitos: el primero de ellos que dicha limitación se defina de manera precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material, en segundo lugar que dicha limitación tenga como objetivo, alguno de los autorizados por la Convención; y por último que sea necesaria dentro de la sociedad y en ningún momento afecte la democracia.

## **2. Análisis Jurisprudencial de los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a los límites de la libertad de expresión.**

La Corte Constitucional Colombiana a través de su jurisprudencia ha abordado en diversas ocasiones el contenido y alcance del derecho fundamental a la libertad de expresión (Upegui, 2010), haciendo énfasis en el contenido del mismo que hace referencia concretamente al derecho que tiene cada individuo de manifestar su pensamiento su opinión, y así mismo como lo indican López & Pinilla (2018) comprende la libertad de información que hace referencia a la facultad de comunicar cualquier hecho, evento, o acontecimientos, y transmitirla por diversos medios.



Ahora bien, frente a la importancia de este derecho fundamental, esta corporación ha señalado lo siguiente:

La libertad de expresión, al igual que las libertades de información y opinión son piedras angulares de cualquier sociedad democrática. Detrás de ellas se encuentra el pluralismo, la contingencia del debate y la posibilidad de que las personas se formen una posición propia frente a su entorno social, artístico, ambiental, económico, científico y político. Es por esto que cada una de las mencionadas libertades cuenta con un lugar privilegiado dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional (Corte Constitucional, T-263 de 2010).

Ahora bien, con los avances que se han venido presentado a nivel de tecnologías de la información y la utilización de herramientas como las redes sociales para difundir opiniones o noticias acerca de hechos o personas, el derecho fundamental a la libertad de expresión en la actualidad tiene un alcance más amplio.

Al respecto, Cerillo (2010) explica que la participación ciudadana y la discusión sobre diferentes hechos de la vida en sociedad se ha trasladado a las redes sociales y al internet, con la masificación del uso del internet. De hecho, los Estados en la actualidad vienen promoviendo políticas sobre el uso de herramientas tecnológicas para la atención al ciudadano, como lo es la estrategia de gobierno en línea en Colombia.

Ahora bien, sobre las discusiones que se han presentado sobre la libertad de expresión en redes sociales, la Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha analizado el alcance de la libertad de expresión en redes sociales, como se verá a continuación.

## **2.1 Sentencia T-713 de 2010:**

En esta Sentencia la Corte Constitucional revisa el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, Cundinamarca, promovida por Rosa Elina Ardila Oliveros y Luis Fernando Rojas Chaves como representantes del menor Gabriel Fernando Rojas Ardila en contra el Colegio de La Presentación de Girardot, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

En este caso concreto, se analiza la actuación de la rectora del Colegio de suspender y expulsar a unos estudiantes del mismo, debido a la creación y participación en un grupo de la red social Facebook donde solicitaban el cambio de esta. Al conocer del grupo y de los estudiantes que participaban dentro del mismo, se comienzan actuaciones sancionatorias en contra de los estudiantes.

En esta Sentencia, la Corte Constitucional hace un importante pronunciamiento acerca de los retos de las instituciones educativas frente al uso de las nuevas tecnologías de la información de los estudiantes:

Las tensiones y cuestiones se potencian a propósito de las nuevas tecnologías en múltiples sentidos. Por ejemplo, los casos de participaciones estudiantiles en debates sobre la conformación y estado del gobierno escolar que incurren en excesos y en abusos pueden ser mayores, por cuanto los nuevos medios tecnológicos permiten amplificar el auditorio, llevando el mensaje a un número mayor de destinatarios y haciendo más daño del que normalmente se producía en tales circunstancias. Pero a su vez, el control que los medios tecnológicos ofrece, abre la puerta para imponer sobre las personas restricciones y limitaciones que no son razonables ni compatibles con una sociedad democrática (Corte Constitucional, T-713 de 2010).

Es clara la Corte Constitucional en este caso, al señalar que va acorde con los principios y valores constitucionales del Estado Social de Derecho imponer restricciones o censuras en el uso de tecnologías de la información (Beltrán, 2014), y en ese sentido exhorta a las instituciones educativas a fomentar la participación de sus estudiantes dentro de las instituciones, y hacer de las tecnologías de la información y las redes sociales una herramienta positiva para la educación.

Al respecto, Castro (2016) señala que la innovación y el uso de las redes sociales es un fenómeno global que debe ser contextualizado en el ordenamiento jurídico de cada Estado, para evitar hechos de Censura, en esa medida es importante que el legislador tome parte activa en este tipo de discusiones y diseñe herramientas de protección de datos y señale el alcance de la libertad de expresión en medio de internet.

Sin embargo, este tipo de discusiones sobre la utilización de las redes sociales se ha presentado nuevamente en diversos contextos como se observa seguidamente.

## **2.2 Sentencia T-050 de 2016:**

En esta ocasión la Corte Constitucional hace revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pasto, dentro de la acción de tutela impetrada por la señora Lucia, en contra de la señora Esther<sup>4</sup> por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre y a la intimidad debido a la difusión de información en la red social Facebook donde se afirma el incumplimiento de una obligación contraída entre las partes.

En esta providencia la Corte Constitucional analiza de manera más amplia la relación de las publicaciones y difusión de información en redes sociales en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y adicionalmente contrasta lo anterior con el alcance del derecho a la intimidad, el buen nombre, la propia imagen y la honra.

Como primera medida, indica esta Corporación que el derecho a la libertad de expresión goza de una protección reforzada de acuerdo a las disposiciones convencionales y constitucionales en la materia, y en ese sentido la imposición de restricciones a la misma solo podrá darse en casos excepcionales, como se advierte a continuación.

(...) jurisprudencialmente se ha establecido que constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión goza de una protección reforzada y una presunción a su favor. Lo anterior, implica que, a menos que en el caso bajo estudio se evidencie que debido a las circunstancias y situación fáctica se debe imponer una limitación, en principio, cualquier tipo de expresión se entiende protegida por la Constitución. Asimismo, se ha establecido que, en caso de conflicto con otros derechos o principios constitucionales, en principio, la libertad de expresión prevalece; lo cual quedará desvirtuado, una vez se compruebe que dadas las circunstancias fácticas del caso que se presenta y siguiendo los lineamientos constitucionales, este se deba limitar (Corte Constitucional, Sentencia T-050 de 2016).

---

<sup>4</sup> Se resguarda la privacidad de las accionantes, por lo cual no se menciona sus nombres completos en la providencia.

No obstante, la Corte Constitucional en este caso señala que las manifestaciones difamatorias, groseras e insultantes, entre otras, no se encuentran bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los instrumentos internacionales que la consagran. De igual manera, como lo señalan Ortega & Forero (2018) el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites, se aplica a internet y las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación y en los casos señalados por las autoridades competentes incluso procederá la rectificación de lo dicho en redes sociales o medios digitales.

Ahora bien, de manera categórica afirma la Corte Constitucional que en todo caso los límites al derecho a la libertad de expresión que se han señalado a través de la jurisprudencia respecto de la divulgación o manifestación de opiniones que se identifiquen como expresiones desproporcionadas que tienen una intención de dañar, perseguir u ofender a la persona, es una clara vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad, entre otros relacionados (Ramírez, 2017).

En ese sentido, se señala lo siguiente:

Si bien puede existir distinción entre las redes sociales y los medios de comunicación como herramientas para el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo: en términos de acceso en el entendido de que es mucho más sencillo acceder a la plataforma de una red social que a un medio de comunicación, también en materia de controles institucionales que son mucho menores en las primeras, o en aspectos de atribución de responsabilidad; lo cierto es que en la evaluación del correcto ejercicio de la libertad de expresión las reglas aplicables son las mismas para ambos, lo que implica que si existe vulneración, se le atribuirá responsabilidad a quien vulnere otros derechos fundamentales a través de estos, ya sea individualmente a quien realizó la publicación vía red social o al medio de comunicación, como al autor del mensaje transgresor, según sea el caso (Corte Constitucional, Sentencia T-050 de 2016).

Ahora bien, advierte dicha corporación que cada caso deberá ser analizado de manera acuciosa por el Juez que este definiendo la controversia, ya que de acuerdo a los preceptos constitucionales y convencionales el derecho a la libertad de expresión tiene primacía frente a ciertos derechos (Iglesias, 2018), en ese sentido no podrán emitirse pronunciamientos sin un

análisis amplio del caso, con lo que se evitara que se censure una opinión o publicación injustificadamente.

### **3. Analisis de la Sentencia T-155 de 2019 sobre la libertad de expresión en el caso de opiniones sobre servidores públicos.**

Este caso, es un precedente importante en la materia en cuanto analiza un caso donde un servidor público interpone una acción de tutela en contra de una persona natural por la divulgación de una información en la red social Facebook donde se señala que el accionante pertenece a una red de corrupción dentro del Hospital Universitario de Santander.

La Corte Constitucional en este caso, revisa la decisión en la presente acción proferida en primera instancia, por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga; y, en segunda instancia, por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga quienes ampararon los derechos fundamentales del accionante al considerar que se había vulnerado su derecho al buen nombre y a la honra por las publicaciones realizadas.

En el análisis realizado por la Corte Constitucional, se analizan aspectos importantes sobre el derecho a la intimidad, al respecto se señala que el mismo tiene diferentes grados que están circunscritos al ámbito personal, familiar, social y gremial. Así entonces, como lo indica Bautista (2015) aquellos asuntos relacionados con los aspectos mencionados pertenecen a la esfera privada del individuo y este decide libremente la exposición de cada uno de estos, por lo cual no podrán permitirse intromisiones que pongan en riesgo este derecho.

Respecto del derecho al buen nombre, dicha corporación señala que este protege a cada individuo de aquellas afirmaciones difamatorias, orientadas a dañar la reputación del mismo y a causar daño:

Así entonces, el derecho al buen nombre protege a las personas frente a las expresiones o informaciones ofensivas o injuriosas, falsas o tendenciosas, o que se tiene derecho a mantener en reserva, las cuales distorsionan el concepto público que se tiene del individuo, pues se considera que la reputación de una persona es uno de los elementos más valiosos de su patrimonio moral y social. Por ende, en cada caso resulta necesario establecer si las

expresiones o informaciones cuestionadas corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, información u opinión (Corte Constitucional, T-155 de 2019).

Pero en esta providencia, la Corte hace un análisis importante sobre la exposición de los servidores públicos en razón a la labor que desempeñan, siendo esto un caso excepcional debido a que como se los discursos en los cuales se cuestionan los comportamientos del Estado o sus servidores públicos tienen una estrecha relación con la democracia y libertad de expresión, y su censura implica una restricción arbitraria.

Por la razón anterior, la Corte Constitucional ha destacado la importancia de proteger las opiniones y expresiones de quienes cuestionan a las autoridades públicas y sus servidores, por hallar en ella una expresión legítima de la democracia y la libertad de expresión e información:

A quienes por razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Además, su mayor exposición ante el foro público fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión (Corte Constitucional, T-312 de 2015).

En ese sentido, se advierte que en los casos en que se genere un conflicto entre los derechos a la intimidad, el buen nombre y la honra y el derecho a la libertad de expresión e información, es deber del juez debe hacer un análisis de ponderación, para lo cual deberá analizar diversos aspectos como (i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se comunica.

Ahora bien, en cuanto al grado de exposición de los servidores públicos, es importante indicar que estos generalmente tienen un grado de exposición mayor que la mayoría de los ciudadanos, esto en razón a las funciones que realizan y la autoridad de la cual se revisten algunos (Bellochio, 2017). En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que en solo deben considerarse como casos relevantes o de interés público la sobre servidores públicos que hacen referencia a aspectos como las funciones que esa funcionario ejecuta; o que expresan la posible existencia de un

incumplimiento de su deber legal, o a aspectos de la vida privada, entre otros casos que deberán ser objeto de análisis por el juez.

Lo anterior, quiere decir que en ningún caso los discursos sobre la vida privada de los funcionarios públicos, o aspectos que no se relacionan en nada con las funciones públicas que ejerce dicho funcionario, no podrán considerarse como protegidos por el derecho fundamental de expresión.

En ese sentido, la Corte Interamericana ha hecho referencia en diversas ocasiones al grado de exposición mayor que tienen los funcionarios públicos, como en el caso *Kimel Vs. Argentina*<sup>5</sup>, donde se expresó lo siguiente:

La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad. Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Kimel Vs. Argentina*, 2008).

Entiende de esta manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los servidores públicos están expuestos a que se cuestione su actuar, razón por la cual no es posible limitar el derecho a la libre expresión cuando existen opiniones o cuestionamientos alrededor de las funciones que estos ejercen, no obstante, en los casos en los cuales se invade la esfera privada del servidor público y su intimidad, no es posible escudar dicho actuar en el derecho a la libertad de expresión, ya que está vulnerando derechos de terceros.

---

<sup>5</sup> En este caso la Corte IDH estudia la responsabilidad internacional del Estado Argentino por la condena a Eduardo Kimel por el delito de calumnia, que se materializó según la justicia Argentina debido a las revelaciones que hizo en una publicación tipo libro.

Precisamente, para aclarar el tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente:

La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público . Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público . Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el presente caso (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel Vs. Argentina, 2008).

Cabe resaltar entonces, que las opiniones que se divulguen sobre la gestión de servidores públicos goza de protección constitucional y convencional mientras no se imputen delitos dentro de las mismas, sin que existan pruebas para ellos, lo anterior tiene como fundamento la imposibilidad de restringir este tipo de expresiones por no encontrar un fundamento lógico para esto, teniendo en cuenta como se ha dicho anteriormente que los servidores públicos tienen un grado de exposición mayor que un particular.

Es importante, indicar que si bien los servidores públicos están expuestos en mayor medida que un particular, esta situación no puede implicar la invasión de su esfera privada y la vulneración de sus derecho a la intimidad, por esta razón los criterios dados en Colombia por la Corte Constitucional resultan de alta importancia para limitar las afirmaciones o cuestionamientos que se hacen respecto de los mismos.

### **Conclusiones**

- En primer lugar, se ha evidenciado que en el ámbito global tanto el derecho a la libertad de expresión, como el derecho al buen nombre y a la honra gozan de protección por considerar derechos inherentes al ser humano, que deben ser garantizados por todos los Estados. En ese sentido, la colisión de estos derechos debe ser analizada con especial cuidado para determinar si existe una afectación real al buen nombre, la honra y la intimidad por una expresión u opinión dada en el marco de las redes sociales. Sin duda



alguna, dentro de los avances más importantes que ha expresado la Corte Constitucional en su jurisprudencia sobre la libertad de expresión en redes sociales, es aquel que hace referencia a que aquellas opiniones o cuestionamientos sobre funcionarios públicos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

- No obstante, lo anterior no es absoluto, ya que dicha libertad de expresión no puede utilizarse para realizar acusaciones sobre algún tipo de hecho o delito, sin que medien una serie de pruebas que fundamenten la afirmación realizada. En esa medida, ha indicado la Corte Constitucional que el juez debe analizar una serie de aspectos como lo que se comunica, quien lo comunica, como lo comunica, de quien es la afirmación u opinión que se está haciendo, y el medio por el cual se está comunicando la información u opinión.
- Así entonces, si bien la Corte Constitucional ha dejado claro que los servidores públicos están expuestos al escrutinio público y en esa medida no es posible restringir el derecho a la libre expresión cuando se divulgue información u opiniones sobre estos, ya que resultaría arbitrario, también es cierto que cada caso merece un análisis concreto de cada uno de los aspectos mencionados anteriormente.
- De igual manera, es importante que las decisiones que se tomen en este ámbito se contemplen aquellos tratados ratificados por Colombia que exponen el alcance del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, esto en virtud de la inclusión de los mismos al ordenamiento jurídico colombiano en virtud de la figura del bloque de convencionalidad. También resulta necesario que se realice un análisis de la interpretación de estos derechos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en virtud del ejercicio de control de constitucionalidad.

### **Consideraciones:**

- Las manifestaciones realizadas por la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión en el caso de las opiniones difundidas en redes sociales resulta importante teniendo en cuenta que da una serie de pautas importantes, como la identificación de las afirmaciones que hacen referencia a la esfera de la vida privada del servidor público y aquellas que cuestionan su actuar como servidor público, de igual manera señala que en el caso de referirse a la comisión de un delito deben existir pruebas que sustenten dicha afirmación,

lo anterior para discernir las opiniones que pueden encontrarse cobijadas por el derecho a la libertad de expresión y aquellas que no.

- Para complementar lo anterior, resulta recomendable que exista una regulación concreta sobre el tema, situación que compete de manera directa al Congreso de la República quien tiene para la elaboración de una Ley en esta materia, que señale los cuestionamientos que pueden considerarse como válidos, respecto de la conducta de los servidores públicos en virtud del derecho a la libertad de expresión, y cuales pueden poner en riesgo su integridad física y psicológica, de acuerdo a lo expuesto en las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado del tema, y aquellas disposiciones sobre la materia expresadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, podrían crearse espacios de participación que permita a los funcionarios controvertir dichas afirmaciones, siendo esto un derecho de los mismos.

### Referencias

- Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Arboleda, P. B., & Aristizábal, J. F. (2018). Estudio jurisprudencial constitucional sobre la libertad de expresión y prensa en Colombia: medios de comunicación, censura y autocensura<sup>1</sup>. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 48(129), 375-400. Recuperado de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/8655>.
- Bautista Avellaneda, M. E. (2015). El derecho a la intimidad y su disponibilidad pública. Bogotá, Colombia: Colección Jus Público. 80. Pag. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Bellochio, L. (2017). Access to public information in Argentina with particular reference to personal and institutional data protection. A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional, 16(65). Recuperado de <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/261>

Beltrán, J. M. (2014). Aproximación al régimen jurídico de las redes sociales. Cuaderno electrónico de estudios jurídicos n°2, año, 2014. Recuperado de <http://www.ceej.eu/pdf/beltran.pdf>

Carmona Salgado, C. (2012). Calumnias, injurias y otros atentados al honor, perspectiva doctrinal y jurisprudencial. Revista Tirant lo Blanch, Valencia 1(19). Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31007.pdf>

Castro, Á. (2016). Derecho a la intimidad en las redes sociales de internet en Colombia. Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política, 10(1), 113-133. Recuperado de [https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas\\_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1178/1928](https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1178/1928)

Cerillo, A. (2010). Web 2.0 y la participación ciudadana en la transparencia administrativa en la sociedad de la información. In L. Cotino (Ed.), Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías (1ª ed., pp. 131–148). Valencia, España: PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia).

Cifuentes, E. (2000). La libertad de expresión en Colombia. Ius et Praxis, 6 (1), 195-271. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/197/19760114.pdf>

Concha, M. (2008). El derecho a defender la libertad de expresión. El Cotidiano, (150), 53-56. Recuperado de <https://www.redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oa?q=libertad%20de%20expresi%C3%B3n&a=&i=&d=&cvePais=&idp=2#panel>

García, S. G., & Gonza, A. (2007). La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1 Ed). San José de Costa Rica. Editorial Corte Interamericana de Derechos Humano.

Iglesias, D. E. (2018). Libertad de expresión en Internet. La responsabilidad de los “Buscadores”. Ab-Revista de Abogacía, (2), 37-46. Recuperado de <https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/ab/article/view/17>

López, A., & Barragán, P. (2018). Las decisiones judiciales: un dilema entre la legitimidad y la influencia de los medios de comunicación. *Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, 12(2), 189-200. doi:<http://dx.doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.10>.

Ortega, L. G., & Forero, A. (2018). El Derecho de Rectificación en las Redes Sociales. *Verba Iuris*, (40), 129-147. Recuperado de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/1572>

Pauner, C. (2018). Noticias falsas y libertad de expresión e información. El control de los contenidos informativos en la red. *Teoría y Realidad Constitucional*, (41), 297-318. Recuperado de <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/22123>

Pinilla Malagón, J. E. & Cubides Cárdenas, J. A. (2016). El control de constitucionalidad: construcción dogmática en Colombia y Argentina. En J. A. Cubides Cárdenas, J. E. Pinilla Malagón, J. Torres Ávila & G. Vallejo Almeida. *Derecho público en el siglo XXI: regulación del mercado, contratación pública y derechos humanos* (pp. 83-121). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Ramírez Huertas, G. (2017). La libertad de expresión y su fundamento en el bloque de constitucionalidad. En G. Ramírez Huertas. *Los derechos humanos a debate: perspectivas desde el derecho internacional* (pp. 99-104). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2010). Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión. OEA documentos oficiales; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.). Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema\\_interamericano\\_de\\_derechos\\_humanos/index\\_AHDLE.html](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_AHDLE.html)

Sánchez, J. (2019). Interpretación del derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia europea e interamericana. *Revista Boliviana de Derecho*, (27), 516-537. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/6813003.pdf>.

Saura, J. R., Palos, P., & Navalpotro, F. D. (2018). El problema de la Reputación Online y Motores de Búsqueda: Derecho al Olvido. *Cadernos de derecho actual*, (8), 221-229. Recuperado de <http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/240>

Upegui, J. C. (2010). Libertad de Expresión, Redes Sociales y Derecho Penal; Estudio del Caso Nicolás Castro. Rev. Derecho del Estado, 25, 159. Recuperado de <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revderest25&div=8&id=&page=>

## **Jurisprudencia**

Corte Constitucional colombiana. (2011). Sentencia C-442 de mayo 25. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Corte Constitucional colombiana. (2010). Sentencia T-263 de abril 19. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

Corte Constitucional colombiana. (2010). Sentencia T-713 de 2011 de septiembre 8. M.P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional colombiana. (2015). Sentencia T-312 de mayo 22. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Corte Constitucional colombiana. (2016). Sentencia T-050 de febrero 10. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Corte Constitucional colombiana. (2019). Sentencia T-155 de abril 4. M.P. Diana Fajardo Rivera.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004). Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008). Caso Kimel Vs. Argentina . Sentencia del 2 de mayo Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.